

México ante la frágil situación en Malí y el Sahel

Mexico and the Fragile Situation in Mali and the Sahel

Jesús Cisneros Chávez

Misión Permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas

jcisneros@sre.gob.mx



Resumen

La evolución del conflicto en Malí y el Sahel ha traído consigo cambios importantes en la dinámica dentro del Consejo de Seguridad. La prolongada crisis de seguridad en esta región de África y la creciente divergencia de intereses entre los miembros del Consejo dificultan alcanzar acuerdos y muestran los resultados limitados que ha tenido la acción de ese órgano en la estabilización del Sahel. Frente a ello, México abogó por una revisión de la estrategia para pacificar la región y promovió un diálogo abierto y transparente que permitió mantener el apoyo unánime al Comité de Sanciones sobre Malí.



Abstract

The evolution of the conflict in Mali and the Sahel has brought about significant changes in the dynamics within the Security Council. The prolonged security crisis in this African region and the growing divergence of interests among Council members make it increasingly difficult to reach agreements and show the limited results that the Council's actions have had in stabilizing the Sahel. In this context, Mexico advocated for a review of the strategy to pacify the region and promoted an open and transparent dialogue that allowed for the unanimous support of the Sanctions Committee on Mali to be maintained.



Palabras clave

Consejo de Seguridad, Sahel, Malí, MINUSMA, Naciones Unidas, paz



Keywords

Security Council, Sahel, Mali, MINUSMA, United Nations, peace

México ante la frágil situación en Malí y el Sahel

Jesús Cisneros Chávez

Como miembro electo del Consejo de Seguridad para el periodo 2021-2022, México vio consolidarse una nueva dinámica en torno al conflicto del Sahel¹ determinada por la creciente divergencia entre los intereses de los miembros permanentes respecto a África, particularmente entre Francia y Rusia. De manera paralela, los gobiernos malienses resultantes de los dos golpes de Estado que vivió el país en 2020 y 2021 han sido cada vez más críticos de la acción del Consejo y han buscado influir en sus decisiones mediante alianzas con los miembros africanos (A3) y también con Rusia y China.

El hecho de que México ejerciera la presidencia del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2374 (2017) relativa a Malí (Comité de Sanciones 2374), que, entre otros asuntos, analiza los informes del Grupo de Expertos que lo asiste para dar seguimiento a la situación en ese país, le dio una perspectiva privilegiada sobre los esfuerzos para estabilizar a la región en su conjunto. Malí, que entre la década de 1990 y el inicio de los años 2000 vivió un proceso de democratización ejemplar,² es, desde 2012, el epicentro de la crisis regional.

¹ Para la finalidad de este artículo, se considera como el Sahel la zona de África que ocupan Burkina Faso, Chad, Malí, Níger y Mauritania.

² Véase Robert Pringle, "Mali's Unlikely Democracy", en *The Wilson Quarterly*, vol. 30, núm. 2, primavera de 2006, pp. 31-39.

Para entender cómo se ha gestado esta situación, es necesario pasar revista a dos elementos: la evolución del conflicto en Malí y las respuestas del Consejo de Seguridad a la situación en ese país y el Sahel.

Malí: epicentro de la crisis en el Sahel

Si bien la fragilidad institucional en el Sahel ha sido una constante desde que los Estados de la región se independizaron de Francia en la década de 1960, la situación actual empezó a configurarse en 2012. Dos factores vinculados entre sí fueron determinantes para esta crisis que tiene su centro en Malí: la caída de Muamar el Gadafi, en Libia, en 2011, y la rebelión de la minoría tuareg que estalló en 2012 en el norte del territorio maliense.

Ante la intervención de la OTAN en Libia y el consiguiente derrocamiento de Gadafi, los combatientes tuaregs originarios de Malí que peleaban en el conflicto civil libio retornaron al norte de Malí.³ Simultáneamente, la dispersión del arsenal del ejército libio incrementó la disponibilidad de armas y municiones en todo el Sahel.

Este contexto favoreció la reactivación de las reivindicaciones separatistas de algunos grupos tuareg en el norte de Malí, cuyas relaciones con Bamako han sido conflictivas desde la independencia del país. Diversos grupos armados tuareg, organizados posteriormente en torno a la Plataforma de Movimientos del 14 de Junio de 2014 (la Plataforma) y el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA), iniciaron una rebelión contra el ejército maliense en enero de 2012.⁴ En la parte inicial de la revuelta, estos grupos se aliaron con organizaciones extremistas como el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO), Al-Qaeda y Ansar Dine, aunque la alianza no perduró y los islamistas terminaron rompiendo con el MNLA.

³ Rabah Aynaou, *L'OTAN et les enjeux sécuritaires dans la région saharo-sahélienne à l'ère de la nouvelle donne géopolitique*, Roma, NATO Defense College (Research Paper, 110, marzo de 2015, en <http://www.jstor.com/stable/resrep10454> (fecha de consulta: 15 de junio de 2023).

⁴ Cabe señalar que Malí había enfrentado rebeliones tuareg en 1962, 1990 y 2006.

Las victorias iniciales de la alianza rebelde ocasionaron una crisis política que condujo a un golpe de Estado contra el presidente Amadou Toumani Touré en marzo de 2012. La toma de Gao por parte de MUXAO y la caída de Tombuctú en manos de Ansar Dine, apenas unos meses después de iniciada la insurrección, avivaron el temor de que se creara un califato en el Sahel central. Tratándose de una de sus zonas de influencia en el continente africano, Francia desplegó en 2013 la operación militar Serval, que logró preservar la integridad del Estado maliense frente al avance de los grupos terroristas en Malí. Esta fuerza fue sustituida, un año después, por la operación Barkhane con un enfoque regional.

En 2013, Ibrahim Boubacar Keïta ganó las elecciones presidenciales con la promesa de pacificar el país y fue reelecto en 2018. Durante su primera administración, el proceso de paz facilitado por Argelia condujo a la firma del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí entre el Gobierno de Malí, la Plataforma y el MNLA en 2015. Si bien este acuerdo sentó las bases para la pacificación del norte del país y la neutralización de estas dos poderosas formaciones, los grupos islamistas no fueron asociados a las negociaciones y su actividad se intensificó en el centro del país. La escasa presencia del Estado maliense en su extenso territorio permitió a los islamistas vincularse a diversas actividades ilícitas lucrativas y explotar las rivalidades entre comunidades para reforzar su poder.

La creciente virulencia de las organizaciones extremistas, la intensificación de la violencia en el marco del combate al terrorismo, las rivalidades entre comunidades de agricultores y trashumantes, los escasos avances en las reformas previstas en el Acuerdo para la Paz y la debilidad institucional del Estado maliense dieron pie un creciente descontento popular.

En este complejo panorama, las inconformidades sobre las elecciones legislativas del 2020 desembocaron en una ola de manifestaciones encabezadas por el movimiento M5-RFP. Este movimiento logró unir diversas voces de la oposición política y liderazgos sociales, como el del imán Mahmoud Dicko, para demandar la renuncia del presidente Keïta, acusado de no haber podido acabar con la violencia ni mejorar la situación económica y de colaborar con intereses extranjeros, en particular con Francia, cuya presencia militar era cada vez más impopular, en parte por el complejo pasado colonial.

En medio de esta movilización social, un grupo de militares encabezado por el coronel Assimi Goita depuso y detuvo a Keïta. Los militares formaron el Comité Nacional para la Salvación del Pueblo y nombraron un Gobierno que dirigiría al país durante un periodo de transición, cuya hoja de ruta con duración de 18 meses fue validada por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO, por sus siglas en francés). Los desacuerdos entre Ejército y Gobierno sobre la reorganización del gabinete condujeron a un segundo golpe de Estado el 24 de mayo de 2021. La designación de Assimi Goita como presidente y la interrupción del proceso de transición dieron lugar a la imposición de sanciones contra el país (cierre de fronteras, congelamiento de activos financieros en la región, etc.) y sus dirigentes por parte de la CEDEAO.

Paralelamente, la creciente cooperación del Gobierno de Malí con Rusia, mediante la presencia de la empresa rusa de seguridad privada Grupo Wagner (activo en otros conflictos como la República Centroafricana y Libia) en la lucha contra organizaciones terroristas tensó las relaciones de Malí con Francia, la Unión Europea y Estados Unidos. Diversos informes de países occidentales vincularon al personal del Grupo Wagner con ataques contra civiles y violaciones de derechos humanos. Malí defendió su libertad de decidir con quién cooperar para luchar contra el terrorismo y esto desembocó en el retiro de las operaciones militares Barkhane (Francia) y Takuba, (fuerza europea), la suspensión de la cooperación militar con Francia y la expulsión de su embajador en Bamako.

El acercamiento con Rusia en materia de seguridad permitió al ejército maliense adoptar una postura más ofensiva frente a los grupos terroristas sin mayores exigencias en materia de derechos humanos. A la par, se desplegó una campaña de comunicación oficial que enfatiza las victorias militares de las fuerzas armadas para mostrar la eficacia de la nueva alianza. Sin embargo, a más de un año de esta asociación y casi dos después de que el ejército asumiera el mando del país, los datos muestran una tendencia preocupante, con la violencia intensificándose en el Sahel central y expandiéndose hacia los Estados costeros de África occidental.

Según el Global Center for the Responsibility to Protect, en 2022, los ataques de grupos armados islamistas (señaladamente por parte del Estado Islámico del Gran Sahara, EIGS) han sido, de nuevo, frecuentes en el norte del país, donde la situación se había estabilizado relativamente después

del Acuerdo para la Paz de 2015. Además, se han reportado numerosas víctimas civiles en algunas de las operaciones antiterroristas de las fuerzas aliadas malienses y sus aliados rusos.⁵

El Grupo de Expertos sobre Malí⁶ indicó en su informe de febrero de 2023 que, por primera vez en siete años, las fuerzas armadas malienses habían tenido una confrontación armada con los grupos signatarios del Acuerdo para la Paz. En la región de las tres fronteras, entre Malí, Níger y Burkina Faso, los choques entre el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en inglés) y el EIGS han agravado la inseguridad, sobre todo después de la decisión maliense de retirarse, en 2022, de la Fuerza Conjunta del G5-Sahel.⁷

La inseguridad resultante tiene un costo humanitario elevado: hay más de 400 000 personas desplazadas internas en Malí, más de medio millón de niñas y niños no tienen acceso a educación debido al cierre de escuelas, y más de dos millones se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.⁸ Se calcula que, desde 2012, 1 500 000 personas han perdido sus hogares y hay 198 000 refugiados malienses en Burkina Faso, Mauritania y Níger.

Pero, ¿qué ha hecho la comunidad internacional, en particular el Consejo de Seguridad, para transformar la difícil situación que, desde Malí, amenaza con arrastrar a todo el Sahel en una espiral de violencia y debilitamiento de las instituciones? A continuación, se analizará sintéticamente la lógica de la respuesta del Consejo de Seguridad, su evolución y los desafíos que enfrenta actualmente este órgano en la región.

⁵ “Central Sahel (Burkina Faso, Mali and Niger)”, en Global Centre for the Responsibility to Protect, 31 de mayo de 2023, en <https://www.globalr2p.org/countries/mali/> (fecha de consulta: 15 de junio de 2023).

⁶ Consejo de Seguridad, “Informe de mitad de periodo del Grupo de Expertos sobre Malí”, S/2023/138, 22 de febrero de 2023, en <https://undocs.org/S/2023/138> (fecha de consulta: 16 de junio de 2023).

⁷ Creada en 2017 por Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger, con el apoyo de Francia, para combatir a los grupos extremistas en una zona que 50 kilómetros de cada lado de las fronteras entre los países miembros. Más adelante se explicará el papel del Consejo de Seguridad respecto a esta fuerza militar.

⁸ Consejo de Seguridad, “La situación en Malí. Informe del Secretario General”, S/2023/21, 6 de enero de 2023, pp. 10-11, en <https://undocs.org/S/2023/21> (fecha de consulta: 16 de junio de 2023).

El Consejo de Seguridad ante a la situación en el Sahel

Las respuestas que el Consejo de Seguridad ha aportado a las múltiples crisis de esta región reflejan la experiencia acumulada por este órgano en el tratamiento de los conflictos en África. Al mismo tiempo, la insuficiencia de resultados tangibles ha dado lugar a cuestionamientos sobre la pertinencia de las herramientas con las que cuenta el Consejo para cumplir su mandato de preservar la paz y la seguridad internacionales.

En sus primeras reacciones a la crisis de 2012, el Consejo de Seguridad se limitó a expresar preocupación por el deterioro acelerado de la situación en Malí y a respaldar los esfuerzos de la Unión Africana y la CEDEAO.

La primera resolución que se adoptó sobre la situación en Malí fue la 2056 (2012), la cual condena el golpe de Estado de marzo de 2012, valida los acuerdos alcanzados con la CEDEAO para el restablecimiento del orden constitucional, llama a un cese el fuego entre las partes beligerantes y reafirma su apoyo a la integridad territorial maliense. Asimismo, pide al secretario general una estrategia integral para la región del Sahel que contemple cuestiones de seguridad, gobernanza, desarrollo, derechos humanos y la situación humanitaria. Desde el inicio del conflicto, se observa una clara conciencia de que hay que atender los problemas subyacentes y adoptar un enfoque regional.

Ante el rápido avance de los grupos rebeldes tuaregs, descrito más arriba, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2085 (2012) para autorizar, bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el despliegue de la Misión Internacional de Apoyo a Malí con Liderazgo Africano (AFISMA). Con casi 8000 efectivos procedentes de países africanos y un financiamiento a base de contribuciones voluntarias, la arquitectura institucional de esta operación que llegó a Malí en enero de 2013 no estaba adaptada para hacer frente a la complejidad del combate (una gran diversidad de grupos armados operando en un vasto territorio ante el colapso del Estado). Sus contribuciones fueron, sin embargo, importantes para el restablecimiento del orden constitucional mediante las elecciones que permitieron la llegada al poder de Keïta en 2013.

La MISMA y la Oficina de Naciones Unidas en Malí (UNOM, por sus siglas en francés), establecida en diciembre de 2012 por el Consejo de Seguridad,

allanaron el camino para que en 2013 se creara, mediante la resolución 2010, la Misión Multidimensional Integrada de las Naciones Unidas para la estabilización en Malí (MINUSMA). El vasto mandato de esta misión de mantenimiento de la paz incluye la protección de civiles, apoyo para la estabilización del país, monitoreo de la situación de derechos humanos, apoyo al proceso político y la estabilización del centro del país. La amplitud del mandato viene acompañada de recursos considerables, cuanto menos si se compara con las otras operaciones de mantenimiento de la paz (OMP). En junio de 2022, según datos de la ONU, la MINUSMA contaba con 17 557 efectivos y un presupuesto anual de más de USD 1262 millones, el más alto de las OMP.

Esta fuerza resulta, sin embargo, insuficiente para estabilizar un país cuya extensión territorial es el doble de la de Francia, con escasa infraestructura carretera y de comunicaciones, una muy limitada cobertura de servicios básicos y en el que operan diversos grupos armados, algunos de ellos inspirados en ideologías extremistas. La protección de civiles en ese contexto es una tarea titánica, muy por encima de los medios con los que cuenta la MINUSMA, que genera grandes expectativas entre la población y fuertes críticas cuando se contrasta el ambicioso mandato de la misión con la dura realidad de las víctimas civiles del conflicto. Los frecuentes ataques de los grupos terroristas contra la MINUSMA hacen de esta una de las OMP más peligrosas.⁹

Sobre el terreno, la MINUSMA cooperó estrechamente con la operación militar francesa Barkhane hasta el retiro de esta última en 2022, resultado de las tensiones diplomáticas franco-malienses. Con 4500 soldados y un importante equipamiento aéreo, Barkhane tenía por objetivo la lucha contra organizaciones terroristas, aspecto que está fuera del mandato de la MINUSMA, pero forma parte de los esfuerzos para contrarrestar la violencia. La operación francesa, proveía también información de inteligencia, equipo aéreo y asistencia médica a los cascos azules.

⁹ Desde su creación hasta febrero de 2023, 168 cascos azules han perdido la vida en actos hostiles. ONU, "Mali: Three U.N. Peacekeepers Killed in Explosive Attack", en Noticias ONU, 21 de febrero de 2023, en <https://news.un.org/en/story/2023/02/1133742> (fecha de consulta: 16 de junio de 2023).

Algunos sectores de la población maliense identificaron a la MINUSMA con Francia, antigua potencia colonial, debido a la cooperación con las fuerzas francesas. La compleja historia de las relaciones entre París y Bamako después de la independencia de Malí explica que exista entre algunos grupos de la sociedad un marcado sentimiento antifrancés. Esos grupos suelen descalificar a la MINUSMA como un instrumento en manos de Francia para dominar la región. Este discurso de rechazo a la MINUSMA representa una amenaza para la seguridad de su personal y obstaculiza el cumplimiento de su mandato. Desafortunadamente, la misión no ha tenido la capacidad de responder de manera eficaz a la proliferación de mensajes y verdaderas campañas en su contra orquestadas por diversos grupos de interés.

Durante las discusiones sobre el trabajo de la MINUSMA, México fue uno de los primeros países en llamar la atención sobre la expansión de la violencia hacia el sur de Malí. Además, promovió una evaluación del trabajo de esta misión que tomara en cuenta las lecciones aprendidas en sus casi 10 años de operación, en particular ante el deterioro de la gobernanza en el país, como consecuencia de los golpes de Estado de 2020 y 2021, y los cambios en el terreno de operaciones que supuso la salida de las fuerzas europeas. Como parte de esta discusión, el Consejo de Seguridad solicitó al secretario general opciones sobre el futuro de la MINUSMA, que se publicaron el 16 de enero de 2023.

Cabe mencionar que, entre las propuestas iniciales para definir la configuración de la MINUSMA, se había contemplado que la OMP propiamente dicha fuera acompañada por un componente paralelo destinado a luchar contra organizaciones terroristas. Si bien ese componente nunca se estableció, por los problemas doctrinales que implicaba para el marco de mantenimiento de la paz, el Consejo de Seguridad apoyó otras vías para neutralizar la amenaza terrorista.

Así fue como el Consejo de Seguridad acompañó el despliegue de la Fuerza Conjunta del G5-Sahel desde su creación en 2017, como un mecanismo regional para luchar contra el terrorismo en las zonas fronterizas entre Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger. Debido a los problemas que tienen sus miembros para financiarla (depende fundamentalmente de contribuciones voluntarias) y avanzar en su autonomía, la región ha buscado constantemente que el Consejo de Seguridad conceda un mandato bajo el artículo VII de la Carta de la Naciones Unidas a la Fuerza Conjunta, lo que

le daría acceso a financiamiento vía el presupuesto regular de las Naciones Unidas. Esta iniciativa cuenta con diversos apoyos al interior del Consejo de Seguridad, en especial de Francia y los países africanos, pero ha enfrentado resistencia por parte de Reino Unido y Estados Unidos. Los argumentos contra el financiamiento directo a la Fuerza Conjunta incluyen que se trata de una operación antiterrorista, poco consolidada (cada ejército participante opera de manera casi autónoma) y con un historial de abusos de derechos humanos. Como alternativa, el mandato de la MINUSMA incluyó, desde 2017, provisiones sobre apoyo logístico a la fuerza conjunta en materia de aprovisionamiento de las tropas, principalmente, con financiamiento europeo.

Ante las dificultades para neutralizar las organizaciones terroristas en la región, la petición de un mayor respaldo de las Naciones Unidas al G5-Sahel fue ganando apoyos al interior del Consejo de Seguridad y en 2021 se acordó pedir al secretario general un informe sobre las opciones para respaldar la iniciativa. El informe, presentado en octubre del mismo año, reactivó el debate y, en la reunión de noviembre sobre este tema, quedó claro que la presión política de los países africanos para reforzar la Fuerza Conjunta estaba ganando terreno. Sin embargo, en mayo de 2022, Malí anunció su decisión de abandonar el G5-Sahel ante la negativa de los otros miembros de transmitir la presidencia del grupo a las autoridades militares malienses.

La discusión sobre un posible apoyo reforzado de las Naciones Unidas, vía un mandato de Consejo de Seguridad para la Fuerza Conjunta, perdió vigencia, por lo menos en lo que los miembros restantes de este mecanismo deciden sobre su futuro. En todo caso, esta crisis comprobó una cuestión en la que México insistió durante sus intervenciones: para que el Consejo de Seguridad diera su respaldo a la Fuerza Conjunta era indispensable que sus miembros tomaran las decisiones políticas y operativas necesarias para fortalecer y armonizar el compromiso de cada uno al interior de la alianza. Resulta ilustrativo sobre dónde estaban los verdaderos problemas de esta alianza el hecho de que la crisis actual no es resultado de la situación financiera de la Fuerza Conjunta, sino de la incapacidad de resolver una desavenencia política.

Ante la rápida reconfiguración de las fuerzas que operan en la región, el secretario general lanzó en 2022 el Panel Independiente de Alto Nivel sobre Seguridad y Desarrollo en el Sahel. Este mecanismo reúne a la Unión

Africana, la CEDEAO y el G5-Sahel para reflexionar sobre los ajustes que requiere la estrategia con el objetivo de presentar recomendaciones en 2023.

Por último, es necesario señalar otra pieza importante de la arquitectura que se ha construido desde el Consejo de Seguridad para la estabilización de Malí: el Comité de Sanciones 2374. Este órgano subsidiario fue creado en 2017 a petición de las autoridades malienses para sancionar individuos o entidades que obstruyan la implementación del Acuerdo de Paz y fue presidido por México durante el periodo 2021-2022.

Los informes del Grupo de Expertos del Comité permiten vigilar la evolución del conflicto e identificar a quienes incurran en comportamientos que caigan en alguno de los supuestos que prevé la resolución 2374 (2017). Actualmente, hay ocho individuos en la lista de sanciones.

Es importante reconocer las limitaciones de este régimen. Las dos sanciones impuestas (prohibición de viajes internacionales y congelamiento de activos financieros) tienen una eficacia limitada en un contexto como Malí, que forma parte de un bloque regional con libertad de circulación de personas (la CEDEAO) y donde la mayor parte de la población no está bancarizada. Por otra parte, al enmarcar su actividad en la implementación del Acuerdo para la Paz, el Comité de Sanciones 2374 no tiene competencia directa sobre la actividad los grupos terroristas que actualmente son los principales responsables de la violencia en Malí.

Sin ignorar estas limitantes, México promovió, desde la presidencia del Comité, un diálogo directo con los Estados de la región, incluido Malí, que representan la primera línea de aplicación de las sanciones. Para mantener la pertinencia de la lista de sanciones, se realizó la primera actualización de la lista desde la creación del Comité. Interpuso, además, sus buenos oficios para facilitar el diálogo entre el Grupo de Expertos y las autoridades malienses, con el objetivo de que el Comité pudiera seguir recibiendo informes sobre la situación en el país.

La dinámica interna del Consejo de Seguridad

Para la concepción y puesta en marcha de las iniciativas descritas someramente hasta aquí, el Consejo de Seguridad se tuvo que reunir, debió otorgar y renovar mandatos, solicitar informes al secretario general y analizarlos,

pedir que se realizaran investigaciones y ponderar sus resultados. Cada una de estas acciones es el resultado de una negociación en la que los 15 miembros alcanzaron un acuerdo.

Tradicionalmente, los asuntos vinculados con África habían sido espacios donde las dinámicas internas permitían ofrecer soluciones a los retos a la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, algunos de estos temas en la agenda del Consejo de Seguridad han dado lugar a una polarización cada vez más marcada, motivada primordialmente por la competencia entre los miembros permanentes para posicionarse en África.

Resulta representativo de esta tendencia el hecho de que en junio de 2022 el mandato de la MINUSMA fuera renovado con 13 votos a favor y la abstención de China y Rusia, cuando desde 2013 había sido aprobado por unanimidad. Este resultado se dio meses después de que se reportara la presencia del Grupo Wagner en Malí, lo que reveló un mayor involucramiento de Rusia en el Sahel y generó fricciones con los países occidentales, que acusaron a este grupo de explotar los recursos mineros del país. Años atrás, una situación similar se había vivido en la República Centroafricana, también con consecuencias sobre la relación entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Los datos sobre las resoluciones adoptadas en los años 2021 y 2022 muestran, por un lado, la gran atención que concede el Consejo de Seguridad a las cuestiones africanas y, por el otro, una disminución en el número de decisiones que sugiere mayores dificultades para alcanzar acuerdos entre los miembros. Así, en 2021, hubo 37 decisiones¹⁰ relacionadas con África (26 resoluciones y 11 declaraciones de la presidencia), es decir, 66.07% del total de decisiones tomadas ese año. En 2022, el Consejo adoptó 29 decisiones (27 resoluciones y 2 declaraciones de la presidencia) sobre cuestiones africanas, o 60.42% de todas. La evidente reducción del número de declaraciones de la presidencia, que deben ser adoptadas por unanimidad, ilustra claramente las dificultades para llegar a acuerdos.

A pesar de lo anterior, existen todavía espacios para hacer avanzar las cosas si se moderan las expectativas en función de lo que es factible y se consulta de manera transparente y constante a todas las partes de una negociación.

¹⁰ Entiéndase aquí “decisión” como resolución o declaración de la presidencia.

Dos meses después de que se rompiera el historial de renovación del mandato de la MINUSMA por unanimidad, en agosto de 2022, México fue coautor junto con Francia de un proyecto de resolución para renovar el régimen de sanciones relativo a Malí y el mandato del Grupo de Expertos. Desde la presidencia del Comité de Sanciones 2374, la delegación mexicana facilitó, junto con la francesa, una negociación que condujo a la adopción de la resolución con el voto favorable de los 15 miembros.